

## *Reseñas*

**DAMONTE, Gerardo H. *The Constitution of Political Actors. Peasant Communities, Mining, and Mobilization in Bolivian and Peruvian Andes.* Saarbrücken-Berlin: VDM Verlag, 2008, 349 pp.**

¿Qué particularidades tiene la constitución de actores políticos en dos países andinos como Perú y Bolivia? ¿Tiene la globalización los mismos efectos en estos dos países que comparten la historia común de haber sido parte de una misma unidad administrativa (ya sea como parte del imperio incaico o como parte del Virreinato del Perú)? Estas son las preguntas que articulan el trabajo de Damonte en *The Constitution of Political Actors. Peasant Communities, Mining, and Mobilization in Bolivian and Peruvian Andes*, trabajo en el cual, a través de un interesante recorrido que nos lleva desde la relación entre comunidades campesinas y corporaciones mineras hasta la formación de organizaciones de representación indígena de carácter nacional, para luego analizar la construcción de discursos políticos de carácter simbólico en movilizaciones y protestas en Bolivia. Este recorrido busca ahondar en los detalles que determinan que procesos similares, como la neoliberalización de la economía, hayan tenido impactos distintos en dos países tan cercanos y culturalmente vinculados.

Este libro nos presenta procesos que son interesantes de leer, porque nos dan cuenta de la apropiación y creación de espacios para la movilización, la creación de espacios de poder y la constitución de actores políticos. Estos mismos procesos trazan la emergencia de formas de nacionalismo que, desde abajo, utilizan al Estado como aliado, soporte o elemento a problematizar en las luchas que se derivan de la creciente globalización e ingreso de capitales transnacionales.

Es importante resaltar, como afirma Damonte, que los modelos de producción inherentes a la minería de capitales transnacionales implican relaciones asimétricas entre compañías y comunidades. La presencia minera puede generar crisis en las economías familiares, en el paisaje y en el liderazgo político. Las relaciones de

la comunidad con la naturaleza también pueden verse transformadas, ya que no solo cambian las formas en las que las familias objetivan la naturaleza, sino que nuevos discursos ambientales muestran cierta politización en la relación con la naturaleza, a la vez que se crea una mayor conciencia ambiental.

Los casos de Chuquiña (Bolivia) y Angoraju Carhuayoc (Perú), dos comunidades campesinas que Damonte nos presenta detalladamente, nos dan razón de dos espacios que, dadas ciertas particularidades históricas y políticas, se interrelacionan con la actividad minera. A partir de esta relación se van generando formas específicas de organización, y por lo tanto de constitución de las comunidades mismas como actores políticos. La actividad minera, en este escenario, resulta ser un ejemplo paradigmático de los impactos que se derivan de la globalización y de las aperturas económicas que implicó la reforma neoliberal de la década de 1990. A través del análisis de esta actividad, se analizan experiencias políticas e históricas específicas de relación entre estas comunidades, empresas y Estado y se comprenden las dinámicas que respaldan la creación de agentes políticos locales que interactúan directamente con la empresa en busca de la satisfacción de expectativas.

La propuesta de Damonte es interesante, porque nos lleva de forma fluida desde el análisis de los procesos históricos peruanos y bolivianos que han configurado posturas y tendencias sobre la minería hasta la relación entre empresas y comunidades. Como resultado de la revisión histórica, los casos de Perú y Bolivia cobran un carácter singular, ya que los fenómenos históricos, relaciones sociales y las experiencias colectivas se hacen particulares en tanto se comparten tradiciones, valores, sistemas, ideas y formas institucionales distintas. Mientras que en Bolivia los mineros se constituyeron como un grupo obrero que, a través de tradición oral en quechua, transmitían y reformulaban su identidad como mineros y campesinos, la economía más diversificada del Perú generó que la actividad minera tenga mano de obra más móvil, y por lo tanto no hubo lugar para la creación identidades comunes (al menos no en relación con las actividades económicas).

En el caso de Chuquiña y Angoraju Carhuayoc estamos frente a comunidades campesinas que se convierten en actores políticos que aluden a los derechos indígenas como herramientas políticas en su relación con la actividad minera. Mientras que en el caso boliviano estos derechos dialogan con discursos de naturaleza étnica, en el caso peruano lo hacen con discursos medioambientalistas que priorizan el tema del acceso y uso a recursos naturales. En ese sentido, las luchas ambientales se convierten en un mecanismo para adquirir control sobre temas fundamentales de soberanía comunal.

Las reformas estructurales neoliberales, con la entrada importante de capital trasnacional, ponen en primera página la lucha por los recursos naturales y los cambios en las formas de representación. En este escenario, la comunidad se erige como un espacio para la praxis política, vehículo para la transformación y reproducción social, dando pie con ello a la creación de espacios políticos para el empoderamiento de comunidades. En este escenario el tipo de conexión con el poder estatal determina los derroteros del caso peruano y el caso boliviano, mientras que en Bolivia comunidades como Chuquiña derivan su poder no de su fortaleza interna, sino más bien de su capacidad de articularse políticamente con actores externos. En el caso de comunidades como Angoraju Carhuayoc, el discurso que prima en este proceso sienta el poder en la organización comunal como instancia para negociar y relacionarse con la empresa minera. La frase: «como comunidad somos más fuertes, somos más personas y nadie puede derrotarnos» ejemplifica bien el rol de la comunidad en casos como el de Angoraju Carhuayoc.

Aportes importantes en la comprensión del tema radican en el análisis que va más allá de las comunidades y consiste en la revisión de las experiencias la Compañía Minera Antamina CMA (para el caso peruano) y la Empresa Minera Inti Raymi - Emirsa (para el caso boliviano). Resultado de esta revisión tenemos que la intervención de estas empresas en el escenario local han estado mediadas por las necesidades propias de los proyectos; así, tenemos que las políticas de responsabilidad social corporativa se ajustaron a las necesidades inherentes al proyecto, muchas de las cuales forzaron ciertos procesos en las comunidades, agudizando así el nivel de conflictividad entre empresas y comunidades. Las experiencias mineras en las comunidades Chuquiña y Angoraju Carhuayoc nos muestran, acertadamente, que lo que es importante o justo para las trasnacionales y el Estado neoliberal no necesariamente lo es para la gente; he ahí un componente fundamental del conflicto y de las iniciativas locales de empoderamiento político.

Hasta aquí, la presencia minera, su historia y las intervenciones hechas desde ella configuran dinámicas locales de representación política en las comunidades. Pero ¿realmente constituyen estas dinámicas ejemplos de movilización política? ¿Pueden los movimientos campesinos constituirse como movimientos sociales? Damonte complementa el análisis revisando los casos de Conacami (Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería) en el Perú y Conamaq (Confederación de Ayllus y Markas del Qollasuyo) en Bolivia, ambas, organizaciones de representación campesina de carácter nacional en sus respectivos países. Así tenemos que mientras organizaciones como CONAMAQ se erigieron a partir de discursos políticos de reivindicación étnica, la multiplicidad de los casos perua-

nos significaron el fracaso de Conacami como unificador de las fragmentadas realidades sociales de los andes peruanos. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo observado en Bolivia, las diversas comunidades peruanas estaban más interesadas en mantener el control sobre los recursos en directa negociación con el poder estatal antes que seguir discursos étnicos. Además, la mirada hacia los Andes desde la experiencia boliviana remitía a espacios de poder, mientras que en el Perú estos espacios han sido, a lo largo de la historia, fundamentalmente costeros.

Queda, como propuesta interesante, ahondar en el tema que ocupa las últimas partes del libro, es decir, la creación de símbolos en el marco de protestas o discursos políticos como los observados en Bolivia. Damonte acierta en esta última aproximación al tema de la movilización y constitución de actores sociales, ya que nos permite comprender la naturaleza flexible y dinámica de los procesos boliviano y peruano. Las identidades, vistas en primera instancia desde la experiencia de las comunidades, no se desterritorializan al abrirse a nuevos espacios, porque se nutren de discursos que van más allá de la territorialidad y de actividades económicas. Definitivamente, este último punto puede constituir la diferencia más marcada entre el despegue de Conamaq y el debilitamiento progresivo de Conacami. Recordemos que Conacami se constituyó en un diálogo constante con la problemática minera, mientras que Conamaq llevó los discursos étnicos a la esfera nacional, nutriendo así nuevas formas de estructurar y pensar el territorio nacional boliviano.

En un escenario en el que se llevan a cabo importantes intervenciones de empresas mineras este libro constituye un interesante análisis de los complejos recorridos y estrategias locales. Pero no solo eso, nos permite reconocer el valor de las experiencias históricas y políticas locales en la constitución de discursos y mecanismos de acción. La minería es un interlocutor más en esta dinámica en la que el Estado y otras entidades también juegan un rol importante en la creación de discursos sobre identidades locales, e incluso nacionalistas. Un nacionalismo particular, sin duda, que ejemplifica claramente el dinamismo y diversidad en los andes. Estamos frente a un interesante proceso, en el que nuevos actores, nuevos discursos ambientalistas, nuevas leyes y nuevos espacios sociales van configurando las formas de representación política.

Mireya Bravo Frey